**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CUNDINAMARCA
SALA CIVIL - FAMILIA**

MAGISTRADO PONENTE	: PABLO IGNACIO VILLATE MONROY
CLASE DE PROCESO	: UNIÓN MARITAL DE HECHO
DEMANDANTE	: H. DE CARMEN JULIA CAMARGO ÁLVAREZ
DEMANDADO	: LUIS ALBERTO MARTÍNEZ
RADICACIÓN	: 25320-31-84-001-2022-00128-01
DECISIÓN	: CONFIRMA AUTO

Bogotá D.C., veintitrés de junio de dos mil veintitrés.

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandante, a través de su apoderado, contra el auto de fecha 30 de agosto de 2022, proferido por el Juzgado Promiscuo de Familia de Guaduas a través de la cual se rechazó la demanda.

I. ANTECEDENTES:

1. La demanda en referencia fue inadmitida en auto de 8 de julio de 2022 para que se corrigiera y allegara nuevo poder, determinando concretamente que la demanda también se dirige en contra de los herederos indeterminados de la causante CARMEN JULIA CAMARGO ÁLVAREZ y del heredero determinado EVER ALBERTO MARTÍNEZ CAMARGO, se allegará registro civil de nacimiento reciente de LUIS ALBERTO MARTÍNEZ y de CARMEN JULIA CAMARGO ÁLVAREZ, donde obre acápite de notas marginales y anotaciones; debe solicitarse como pretensión se declare la disolución y posterior liquidación de la “sociedad conyugal” presuntamente conformada y la inscripción de la sentencia en los registros civiles de nacimiento correspondientes; además debía darse cumplimiento a lo ordenado en

UNIÓN MARITAL DE HECHO de H. DE CARMEN JULIA CAMARGO ÁLVAREZ contra
LUIS ALBERTO MARTÍNEZ. Apelación de Auto.

el artículo 6 de la Ley 2213 de 2022, esto es, acreditar la remisión de la demanda, sus anexos y la subsanación al extremo pasivo (archivo 5 C-1).

2. La parte demandante mediante apoderado presentó escrito de subsanación de demanda, allegando poderes de José Eduardo Martínez Camargo, Andrés Vicente Martínez Camargo, Luis Fernando Martínez Camargo, Sandra Patricia Martínez Camargo y Gloria Elina Martínez Camargo; y certificados de Registraduría Nacional del Estado Civil de Luis Alberto Martínez y Carmen Julia Camargo Álvarez, donde se indica que no se encontró información sobre el registro civil de nacimiento de los citados y que la “información y copias reposan solamente en la oficina origen del registro civil” (archivo 7 C-1).
3. Por auto de fecha 30 de agosto de 2022 (archivo 9 C-1), la demanda fue rechazada, pues consideró el señor juez a quo, que no se aportaron los registros civiles de nacimiento de los presuntos compañeros permanentes; que si bien se allega respuesta por la Coordinadora del Servicio Nacional de Inscripción de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la misma se indica que la información solicitada se encuentra en la oficina de origen del registro civil, sin que se evidencie que la apoderada de los demandantes haya desplegado la búsqueda respectiva en las Notarías y/o Registraduría donde posiblemente pudiesen reposar dichos documentos, por lo que no se cumplió con lo ordenado por el juzgado.
4. Contra dicha decisión, la parte demandante a través de su apoderado, interpuso recurso de reposición y apelación subsidiaria, indicando que hizo la búsqueda de la información de los Registros Civiles de Nacimiento de los compañeros permanentes, desde el momento en que fue inadmitida la demanda, pero que las respuestas de las entidades, en especial la de la Registraduría Municipal de La Mesa, se obtuvo el 22 de julio de 2022, es decir, vencido el término de cinco días para subsanar la demanda, motivo por el cual solicita se tenga en cuenta las certificaciones expedidas por la Registradora Municipal de La Mesa, Notaría Única de la Mesa y acta de bautismo Luis Alberto Martínez nacido el 19 de noviembre de 1946 y de Carmen Julia Camargo Álvarez nacida el 3 de junio de 1949, documentos que no pudo aportar en el término de subsanación (archivo 10 C-1).

Negada la reposición, se concedió el recurso de apelación que el Tribunal resuelve.

II. CONSIDERACIONES:

Sabido es que la demanda constituye la base fundamental sobre la cual se edifica todo proceso judicial, pues a través de ella es posible determinar aspectos de cardinal importancia como el objeto de la pretensión, los fundamentos de hecho, el derecho invocado, la identificación y naturaleza de las partes, la autoridad a quien se dirige, etcétera, que a la postre serán los elementos que permitirán un fallo de mérito, en tanto que logran delimitar con claridad los denominados presupuestos procesales. Por esta razón, el artículo 82 del Código General del Proceso, señala con celo los requisitos generales que toda demanda debe contener y, adicionalmente, los artículos 83 y 84 *Ibíd*em determinan requisitos especiales para ciertas demandas, junto con los anexos que se deben adjuntar al libelo para los fines estrictamente decisorios.

Ahora bien, el artículo 90 de la referida codificación le otorga entre otras facultades al juez de conocimiento, la de inadmitir la demanda cuando la misma se enmarque dentro de alguno de los defectos allí precisados o incluso de rechazarla cuando se da alguno de los eventos allí mismo consignados. Sin embargo, esa potestad que se da al funcionario judicial, solo se muestra valedera cuando es producto de una debida calificación del libelo petitorio, de modo que las determinaciones que eventualmente lleguen a adoptarse, aparezcan enmarcadas dentro de las precisiones que sobre el particular prevé el legislador. De allí que cualquier inadmisión por fuera de los lineamientos establecidos por el legislador, no tendrá fuerza vinculante y su incumplimiento no puede ser causa de rechazo de la demanda.

Tampoco podrá ser rechazada por causales que no fueron expresamente indicadas en el auto de inadmisión, pues de hacerlo, sería sorprender a la parte demandante por el incumplimiento de requisitos que no le fueron exigidos de manera oportuna.

Sujeto a estas concretas precisiones y dirigiendo la atención a este asunto, delantadamente se advierte que la decisión de rechazar la demanda se muestra acertada por los siguientes razonamientos:

En el presente caso, el juzgado de primer grado por auto de fecha 8 de julio de 2022 (archivo 5 C-1) inadmitió la demanda, señalando que se debían aportar los registros civiles de nacimiento de LUIS ALBERTO MARTÍNEZ y de CARMEN JULIA CAMARGO ÁLVAREZ, donde obre acápites de notas marginales y anotaciones; inadmisión que no resulta caprichosa, por cuanto las notas marginales le permiten al juez saber si alguno de los presuntos compañeros tiene sociedad conyugal vigente; requerimiento que la abogada de la parte demandante incumplió y por ello, en auto del 30 de agosto de 2022 (archivo 9 C-1), el a quo rechazó la demanda.

Visto lo anterior, encuentra el Tribunal que si bien la apoderada de los actores aportó con la subsanación de la demanda certificados de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Luis Alberto Martínez y Carmen Julia Camargo Álvarez, donde se indica que no se encontró información sobre el registro civil de nacimiento de los citados (archivo 7 C-1), lo relevante es que no acreditaron durante el término para subsanar la demanda las diligencias tendientes a obtener tales documentos o constancia del ejercicio del derecho de petición para obtener los respectivos registros de acuerdo con lo previsto en el inciso 2 del numeral 1 del artículo 85 del C.G.P., máxime cuando en la mentada certificación se indicó que: *“Es de anotar que antes de la vigencia del Decreto*

Ley 1260 de 1970, el registro civil se elaboraba en el formato de tomo y folio, sin reportar información ni remitir las copias a ningún archivo centralizado, razón por la cual dicha información y copias reposan solamente en la oficina origen del registro civil.”

Véase que, las diligencias tendientes a obtener tales documentos se acreditaron solamente hasta cuando se formularon los recursos contra el auto que rechazó la demanda, y no durante el término concedido para subsanar la misma; y si bien con la alzada se solicita tener en cuenta las certificaciones expedidas por la Registradora Municipal de La Mesa, Notaria Única de la Mesa y acta de bautismo de Luis Alberto Martínez nacido el 19 de noviembre de 1946 y de Carmen Julia Camargo Álvarez nacida el 3 de junio de 1949, advierte el Tribunal que se debe observar lo previsto en el artículo 13 del C.G.P., que reza: *“Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento...”*, además de lo previsto en el artículo 117 del C.G.P., que establece: *“Los términos señalados en este Código para la realización de los actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposición en contrario.”*

En este orden de ideas, al no haberse subsanado **a tiempo** las falencias advertidas por el señor juez a quo en el auto inadmisorio de la demanda, es procedente el rechazo de la demanda.

Visto lo anterior, se confirmará la providencia apelada, sin que haya lugar a condena en costas (art. 365 – 8° C.G.P.).

III. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto apelado, esto es, el proferido el 30 de agosto de 2022, proferido por el Juzgado Promiscuo de Familia de Guaduas.

SEGUNDO: Sin Costas.

NOTIFÍQUESE

PABLO IGNACIO VILLATE MONROY

Magistrado

Firmado Por:
Pablo Ignacio Villate Monroy
Magistrado
Sala Civil Familia
Tribunal Superior De Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **02db8d88ff1b8ae5c7726664c8e78478e3e890f101b78d9ad944cc863a656bdd**

Documento generado en 23/06/2023 10:19:23 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>